

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA CELINA PÉREZ VÉLEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-014-2018-00239-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia y/o nulidad de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora que nació el 06 de marzo de 1956, y cuenta con 1.397 semanas cotizadas al sistema general de pensiones.

Indica que durante su vida laboral estuvo afiliada en pensiones con el Municipio de Santa Bárbara y posteriormente al ISS, desde 1987 hasta 1999.

Aduce que después de estar afiliada al ISS se trasladó al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A. el 01 de agosto de 2002.

Manifiesta que los asesores de PORVENIR S.A. le dijeron que al afiliarse a dicho fondo iba a tener una mejor pensión que en el ISS debido a los rendimientos financieros que produjera su cuenta de ahorro individual, que se podría pensionar antes de la edad exigida por el ISS, que el RPM se iba a acabar, y que no iba perder el régimen de transición, y no le brindaron la información debida acerca de las graves consecuencia del traslado ya que en razón a su calidad de servidora pública perdería el derecho de transición.

Expone que la AFP PORVENIR S.A. en ningún momento le suministró información adicional consistente en el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual con el fin de obtener una pensión anticipada, ni le brindó la información adecuada, suficiente y cierta para su traslado, es decir, que su traslado no estuvo precedido de una libertad informada.

Finalmente indica que mediante comunicación radicada ante Colpensiones solicitó la autorización de traslado hacia dicha administradora, solicitud que le fue resuelta de manera negativa.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, y condenando a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la actora en el RPM sin solución de continuidad.

Seguidamente condenó a la AFP PORVENIR S.A. trasladar el valor de la cuenta de ahorro individual de la señora MARÍA CELINA PÉREZ VÉLEZ, con los rendimientos que se hubieren causado, incluyendo las comisiones de administración, con excepción de los dineros pagados por seguro previsional, y a comunicar de la decisión a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES para los efectos legales pertinentes.

Finalmente condenó en costas a PORVENIR S.A. y absolvió a COLPENSIONES de las mismas.

Para fulminar condena, el *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la

conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregaron la debida información a los afiliados al momento del traslado.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de PORVENIR S.A. que haya cumplido con su deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de ese consentimiento informado la suscripción del formulario de afiliación, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado de la demandante a la AFP PORVENIR S.A.

En lo que tiene que ver con las sumas que deben ser devueltas a COLPENSIONES como consecuencia de la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional, señaló que únicamente deben trasladarse los valores existentes en la cuenta de ahorro individual de la demandante, sin incluir los porcentajes destinados a los seguros previsionales, pues durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliada al RAIS, estuvo debidamente asegurada para los riesgos de invalidez y de sobrevivencia con ocasión del pago de dicho porcentajes a una aseguradora previsional.

Finalmente, declaró no probada la excepción de prescripción al considerar que, la validez del traslado de régimen se trata de un derecho íntimamente ligado a la pensión, mismo que es un derecho fundamental imprescriptible.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por la apodera judicial de PORVENIR S.A., solicitando sea revocada en su totalidad, indicando que el formulario de afiliación suscrito por la demandante es un documento público que se presume auténtico según los artículos 243 y 244 del CGP y adicionalmente este contiene las declaraciones exigidas por el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, esto es, que la selección de régimen que hizo la demandante fue de manera libre, espontánea y sin presiones, documento que no fue tachado de falso, ni desconocido en este proceso.

Aduce que si bien el juez afirma que PORVENIR S.A. no allegó prueba del cumplimiento del deber de asesoría con la demandante, es decir, que no demostró que entregó información completa, veraz y oportuna al momento de la vinculación, tal

inferencia no se ajusta a la realidad procesal, pues es claro que PORVENIR S.A. cumplió con la carga procesal, pese a la carga de la prueba que se hizo respecto a lo que se dispone legalmente, en la medida en que aportó los documentos que tenía en su poder para demostrar que la demandante estuvo vinculada a PORVENIR S.A. producto de una decisión libre e informada, lo cual no se acredita únicamente con el formulario de afiliación, sino también con la conducta de la afiliada que demuestra su voluntad de permanecer en el RAIS, quien permitió el descuento con destino a dicho fondo.

Expone que no es jurídicamente viable imponerle cargas a PORVENIR S.A. diferentes a las que se preveían en las Leyes existentes al momento de la afiliación, pues esto constituiría una violación al debido proceso y a la confianza legítima, ya que para el momento de la afiliación la demandante, no solo era jurídicamente capaz, sino que adicionalmente el acto que se celebró entre las partes contenía objeto y causa lícita, desconociéndose la validez de los actos jurídicos.

Manifiesta que en el hipotético caso de que se considere por parte del Tribunal que el negocio jurídico celebrado entre las partes no tuvo validez, no pueden olvidarse que el artículo 113 en su literal b) de la Ley 100 de 1993 dispone que deben devolverse los saldos de la cuenta de ahorro individual incluidos los rendimientos, lo que impide a que se condene a valores diferentes a los indicados en dicho literal,, ya que condenar a pagar valores diferentes daría lugar a un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES, toda vez que dichos valores no financian la prestación de vejez.

Finalmente, argumenta que ordenar devolver los gastos de administración no es válido porque son valores que no pertenecen a los afiliados en ninguno de los dos regímenes pensionales pues estos no financian la prestación de vejez y por ende es un argumento válido y una razón de peso para indicar que estos sí resultan susceptibles de prescripción.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente el apoderado judicial de la parte demandante, allego escrito de alegatos, en los que señaló resumidamente lo siguiente:

Solicito que se confirme la sentencia de primera instancia, pero que sea incluida los conceptos de sumas adicionales de aseguradora de cuotas de administración, y los otros conceptos, con sustento en lo siguiente:

La Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias como la de radicación 31.989, 33.083 y 31.314, ha señalado que es atribuible a las Administradora de Fondos de Pensiones Privadas una responsabilidad social y empresarial, especialmente con el potencial usuario de los servicios que ofrece, a fin de que en el proceso de la captación de nuevos clientes les suministre toda la información posible acerca de las ventajas y desventajas que puede acarrear tal cambio, máxime si ello influye notoriamente en su futuro pensional, toda vez que en esa libre competencia entre administradoras se empleaban diversas estrategias para captar nuevos afiliados. Ha derivado la Corte, desde de esos requerimientos, la consecuencia de considerar que ante la ausencia de lo que se ha llamado “buen consejo” se estaría frente a la ineficacia de esos traslados.

Acorde con lo anterior, mi poderdante tenía derecho que para su traslado al Régimen de ahorro Individual con solidaridad, se le hubiera brindado una suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, pero por el contrario fue desinformado, prometiéndole inclusive mejores condiciones para su pensión, vulnerando con ello normas constitucionales y legales, tales como los artículos 48, 49 y 335 de la Constitución Nacional, el artículo 1603 del Código Civil y los artículos 13, 97, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de radicación SL 46292 de 2014, SL 12136 del 3 de septiembre de 2014, SL 9519 de 2015, SL 17595 del 18 de octubre de 2017, SL 19447 de 2017, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 361 de 2019, entre otras, ha declarado la ineficacia de la afiliación basada principalmente en los siguientes argumentos:

1.- La obligación que tenían los fondos de suministrar la información existe desde su misma creación. Dijo la Corte: “... de allí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen so pena de declarar ineficaz ese tránsito (CSJ SL 12136-2014), para lo cual en términos de la máxima corporación se ha debido utilizar un lenguaje “claro, simple y

comprensible”. En otro de los apartes señala: “... las AFP desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional...”

2.- “el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente- Necesidad de un consentimiento informado”

3.- Se ratifica la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado, entre otras por cuanto en la demanda se hacen afirmaciones indefinidas como que los promotores de los fondos no dieron la suficiente información.

4.- Lo más importante de todos estos pronunciamientos es que resaltan que las anteriores reglas son aplicables así la persona no se encuentre en transición, desvirtuando de esta manera la tesis de algunos jueces y tribunales superiores que han mantenido una postura contraria por considerar que dicha jurisprudencia solo es aplicable a estos regímenes

Para el caso en particular de mi poderdante la señora MARIA CELINA PEREZ VELEZ debía haberse brindado la debida información conforme lo dispuesto en los Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003; Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PORVENIR S.A., se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010),

y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)

2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que la afiliada recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la actora, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, como se desprende de la historia laboral válida para bono pensional emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que milita a folios 43 y 44 y la historia laboral emitida por PORVENIR S.A. visible a folios 132 y ss del documento 01 del expediente digital, se afilió a la administradora del RAIS la AFP PORVENIR S.A. el 25 de junio de 2002, como se anota en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 37 del expediente, con efectividad al 1° de agosto de 2002 , conforme se consigna en el certificado SIAFP que milita a folio 107 del documento 01 del expediente digital.

De otra parte, se advierte que para el caso de la demandante, para el momento del traslado de régimen pensional, era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, conforme a la copia de su cedula de ciudadanía que milita a folio 24 del plenario, para el 30 de junio de 1995 contaba con más de 35 años de edad, pues nació el 01 de marzo de 1956, y pese a ello, no se advierte por parte de la Sala que a la demandante se le haya puesto de presente tal situación y se le hubiese explicado en el momento del cambio de régimen pensional, que con dicha decisión estaba abandonando dicho beneficio transicional.

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:57:32 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento (Documento

05 del expediente digital), no se advierte que además de indicar que la asesora de PORVENIR S.A. le manifestó que PORVENIR S.A. era la mejor opción para obtener una pensión de vejez con beneficios económicos, ya que entre más aportes hiciera su pensión sería mucho mejor que en el ISS, esta haya confesado que la asesora de PORVENIR S.A. le hubiere brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no se advierte que haya confesado que se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, contrario a lo manifestado por la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PORVENIR S.A., siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión del *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 2002 cuando se trasladó del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP PORVENIR S.A., sin que resulten de recibo los argumentos expuestos por la recurrente, frente a la permanencia de la demandante en el RAIS y al hecho de que esta hubiese aceptado los descuentos para dicho fondo, pues ninguna de dichos argumentos tiene la facultad de desquiciar la decisión de primera instancia de declarar la ineficacia del traslado en razón a la inobservancia del deber de información.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES y frente a las cuales el *a quo* determinó que PORVENIR S.A. debe trasladar a COLPENSIONES, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante con los rendimientos que se hubieren causado, incluyendo las comisiones de administración, con excepción de los dineros pagados por seguro previsional, encuentra la Sala que, la orden impartida por el *a quo*, no se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, y por tal razón, en sede de consulta en favor de Colpensiones

la misma debe ser MODIFICADA, para en su lugar CONDENAR a PORVENIR S.A., a devolver a COLPENSIONES no solo el valor de la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos financieros y comisiones de administración, sino también los porcentajes que en su momento fueron descontados por dicha AFP de las cotizaciones de la demandante que fueron destinados a pago de primas de seguros previsionales, pago de prima de reaseguro de Fogafín y Fondo de Garantía de Pensión Mínima, es decir, que deberá devolver a Colpensiones el 100% del valor de las cotizaciones, con sus rendimientos financieros y sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Teniendo en cuenta lo anterior, contrario a lo argumentado por PORVENIR S.A. en su recurso de apelación, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque, es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por la AFP PORVENIR S.A. al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

De otra parte, respecto de la declaratoria de prescripción de las cuotas de administración que solicita la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, ella no opera, toda vez que la obligación de restituirlas estos se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de las

sentencias que la declaran, por lo que no sería procedente la prescripción de las cuotas de administración.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será MODIFICADA Y CONFIRMADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. por haber resultado vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de febrero de 2021 proferida por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA CELINA PÉREZ VÉLEZ** contra **COLPENSIONES**, y **PORVENIR S.A.**, MODIFICÁNDOLA en el sentido de declarar que PORVENIR S.A. deberá devolver a COLPENSIONES no solo el valor de la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos financieros o intereses, sino también comisiones o cuotas de administración incluidos los porcentajes de pago de primas de seguros previsionales, de prima de reaseguro de Fogafín y del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, es decir, el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

PROCESO ORDINARIO LABORAL
MARÍA CELINA PÉREZ VÉLEZ Vs. COLPENSIONES Y OTROS
RADICADO: 05001-31-05-014-2018-00239-01

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **929e0d6e7a3997ff4f3ac11185bc49020931a4fdff42f061a1831e926cac28e6**

Documento generado en 18/08/2022 03:23:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>